Imprimir

Arturo Char, el ex-senador, ha sido capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia, su juez natural, en un proceso en el que la principal testigo es Aída Merlano, también antigua senadora y convicta por el delito de compra de votos. Todo parece reducirse a una trama de corrupción regional, en la que se mueven ilegalmente diversos actores, parte de un sistema para-electoral que condiciona torticeramente la representación política, originada de ese modo en procedimientos espurios.
Maquinarias tramposas

Mientras la justicia hace su trabajo sin interferencias, no puede desconocerse el hecho de que, en este cómo otros casos, sobrevuela la sospecha de que existen maquinarias que definen la conformación del poder, a partir de una operación, al mismo tiempo subterránea y descarada que, como la compra de votos, rompe ni más ni menos que con el ethos de la democracia, el mismo que se confirma con el voto libre, expresión de la voluntad ciudadana.

El núcleo de esta operación -la célula de esta acumulación deformada en el capital electoral- es por supuesto el intercambio de una suma de dinero (ahora ya se habla de 100.000 pesos) contra el voto de cada parroquiano.

Dentro de la división del trabajo de este secreto entramado mercantil aparece el papel de un lugarteniente que zonal o barrialmente recluta, organiza y moviliza, con parámetros de control a los vendedores de su voto, base de todo el emprendimiento electoral, un contingente sin el cual no puede ser construida la pirámide. La cual incluye además de estos intermediarios de base, otros más altos en la jerarquía que, centralizando las acciones y las órdenes pertenecen al círculo inmediato de los políticos profesionales, esto es, al grupo reducido de los que trabajan con el candidato simultáneamente jefe y administrador (CEO) de las organizaciones electorales que por otra parte se coaligan para conformar las listas para Cámara, en apoyo por cierto a una candidatura a Senado, algo que no excluye, sino supone el respaldo en su momento a una alcaldía y a una gobernación.

Al lado de esta organización piramidal interviene un jugador decisivo, el contratista,

proveedor del dinero, el recurso con el que entre todos aceitan la maquinaria, entorpecida por el desanimo de los electores potenciales, los que en cambio se trasladan hacia las urnas, si reciben las recompensas, en sumas cada vez más elevadas, entra una campaña y la siguiente.

Daños éticos y políticos

El control de alcaldías y gobernaciones y ministerios será una palanca de inestimable eficacia para re-direccionar los contratos de obras públicas y funcionamiento, en beneficio de empresarios que, con su participación en el juego, cierran el círculo fatídico, al desplazar parte de sus rentas hacia las empresas electorales de sus amigos políticos, a fin de atraer a los votantes y de satisfacer el afán de enriquecimiento ilícito.

Con estas prácticas nefandas, las maquinarias pervierten la democracia, rebajándola a la condición de mercado tramposo y rompen cínicamente los equilibrios; además distorsionan la competencia electoral, elevando por medio de la corrupción los costos de la transacción con tasas crecientes frente a los costos de producción de lo que debiera ser una competencia equilibrada y legítima. Finalmente, al corromper la conciencia de los ciudadanos y suprimir su libertad de escogencia, destruyen la ética de lo público, lo que equivale a borrar todo rastro de nobleza en la política.

Ricardo García Duarte

Foto tomada de: El Espectador